

Medellín, veinticinco (25) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

Proceso	<b>DECLARATIVO RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL</b>
Radicado	<b>05001 31 03 008 2017 00247 02</b>
Demandante	<b>MARÍA ROSALBA, GUSTAVO HERNÁN, LUIS HUMBERTO ELÍAS, MARÍA TERESA DEL NIÑO JESÚS, MARÍA EUGENIA E IVAN DE JESÚS GIRALDO JARAMILLO.</b>
Demandado	<b>TRANSPORTES FUTURO LTDA, ÁNGELA MARÍA GALLEGO Y NICOLÁS ALBERTO LOPERA.</b>
Juzgado Origen	<b>OCTAVO CIVIL CIRCUITO MEDELLÍN</b>

Decide la Sala la apelación de la sentencia en el proceso de la referencia.

## 1. ANTECEDENTES.

### 1.1 DEMANDA<sup>1</sup>.

Los actores pretenden que se declare la responsabilidad civil extracontractual de Transportes Futuro Ltda., Ángela María Gallego y Nicolás Alberto Lopera, en sus calidades de empresa afiliadora, propietaria y conductor del vehículo de placas TKE-920, respectivamente, por la muerte de su padre Pedro Antonio Giraldo Vásquez, en consecuencia, se condenen al pago de indemnización de perjuicios extrapatrimoniales en su favor<sup>2</sup>.

Expusieron que el 30 de mayo de 2007, en la carrera 73B frente a la vivienda con número 93-101 de Medellín, el vehículo de placas TKE-920 circulaba en reversa y en dicha maniobra atropelló con la parte trasera a Pedro Antonio Giraldo Vásquez, quien quedó seriamente lesionado, sufriendo politraumatismos, por lo que debió ser trasladado al Hospital La María, y que como consecuencia directa de este accidente falleció el 10 de junio de 2007.

Señalaron que su padre era una persona afectuosa, amorosa y carismática con sus hijos, y que su muerte les ha causado una grave afectación moral.

Que el vehículo es una camioneta carrocería furgón, y para el momento del accidente estaba destinado al servicio público, afiliado a la empresa Transportes Futuro Ltda.

### 1.2 CONTESTACIÓN.

<sup>1</sup> Ver ruta Carpeta 01. ExpedienteRecibido / Archivo 008-2017-00247 CUADERNO 1 PRINCIPAL Pág. 3 – 10.

<sup>2</sup> En la modalidad de morales la suma equivalente a 70 salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de los demandantes.

**1.2.1 Transportes Futuro Limitada**, pese a haber sido notificado personalmente su representante legal el 7 de septiembre de 2017<sup>3</sup>, no emitió pronunciamiento alguno.

**1.2.2 Nicolás Alberto Lopera**<sup>4</sup>, tras la nulidad por indebida notificación decretada por el Tribunal Superior de Medellín<sup>5</sup>, se tuvo notificado por conducta concluyente en providencia del 13 de junio de 2019<sup>6</sup>; y contestó ser cierto que en la fecha del accidente circulaba con el vehículo en reversa en la dirección indicada y se dio el atropellamiento de Pedro Antonio, sin embargo, aseveró que el lugar del accidente no fue una intersección, la causa de la muerte de la víctima no se encuentra probada y que no conoce de las relaciones de aquel con sus hijos. Asimismo, dijo ser ciertos los hechos relativos al tipo de vehículo, propietaria, empresa afiliadora y tipo de servicio que prestaba para la fecha del accidente.

Se opuso a la prosperidad de las pretensiones, y propuso como medios exceptivos: *i) Prescripción*, pues este tipo de acciones prescribe en 10 años, el accidente ocurrió el 30 de mayo de 2007 y, si bien la demanda fue presentada el 16 de mayo de 2017, no se dio la interrupción de la prescripción, pues los demandados Ángela María Gallego y Nicolás Alberto Lopera fueron notificados por conducta concluyente después del año de haberse admitido la demanda; *ii) Culpa exclusiva de la víctima*, por cuanto Pedro Antonio se encontraba circulando por la vía destinada a los vehículos sin observar las medidas de precaución ordenadas por la normatividad de tránsito, consistentes en prestar atención a la circulación de vehículos, no cruzar por la intersección y circular solo, pese a tratarse de una persona de 83 años y; *iii) Ausencia de nexo causal*, pues conforme al dictamen de medicina legal, el deceso se produjo por una neumonía y no por la fractura de cadera sufrida el día del accidente y de su historia clínica se extrae que era un fumador habitual, por lo que no existe certeza de que la causa directa y exclusiva de su muerte sea atribuible al demandado. En defecto de la culpa exclusiva de la víctima, propuso como medio defensivo la existencia de culpa compartida.

**1.2.3 Ángela María Gallego**<sup>7</sup>, notificada igualmente por conducta concluyente tras la nulidad decretada, se pronunció frente a los hechos en similares términos al codemandado Nicolás Alberto, se opuso a la prosperidad de las pretensiones y propuso como excepciones de mérito: *i) Prescripción*, en tanto la notificación se surtió después de 12 años y 18 días de la ocurrencia de los hechos, sin que operara interrupción; *ii) Ausencia de deber de guarda en la actividad peligrosa*, en tanto no tenía bajo su esfera la guarda del vehículo, pues no conocía o tenía poder de decisión sobre la destinación de este y sus rutas; *iii) Rompimiento de nexo causal*, debido a la falta de precaución del peatón al cruzar la vía por una zona no permitida y que pese a su avanzada edad no se encontraba acompañado de algún

<sup>3</sup> Ibid. Pág. 70

<sup>4</sup> Ibid. Pág 321 – 329

<sup>5</sup> Ibid. Archivo 008-2017-00247 CUADERNO 2 (SEGUNDA INSTANCIA) Providencia del 7 de mayo de 2019, Pág. 2-8.

<sup>6</sup> Ver ruta Carpeta 01. ExpedienteRecibido / Archivo 008-2017-00247 CUADERNO 1 PRINCIPAL Pág. 320

<sup>7</sup> Ibid. Pág. 345-349

cuidador responsable y; iv) *Ausencia de nexo causal*, pues el accidente le causó lesiones más no fue la causa eficiente o necesaria de la muerte, en tanto el dictamen de medicina legal informa que esta tuvo relación con una neumonía que desarrolló.

**1.2.4 Llamada en garantía Seguros del Estado<sup>8</sup>**, se opuso al llamamiento realizado por el codemandado Nicolás Alberto Lopera, alegando la falta de legitimación en la causa por activa y por pasiva por no haber suscrito contrato alguno con este y; al llamamiento de la codemandada Ángela María Gallego, propuso las excepciones de prescripción extintiva del derecho a llamar en garantía a Seguros del Estado y condiciones del contrato de seguro, por no encontrarse amparada la indemnización por perjuicios extrapatrimoniales. En lo relativo a las pretensiones de la demanda, propuso las excepciones de causa extraña y culpa exclusiva de la víctima y el medio de defensa de reducción de una eventual indemnización por concurrencia de responsabilidades.

### 1.3 PRIMERA INSTANCIA<sup>9</sup>.

El 12 de marzo de 2021 se profirió sentencia en audiencia pública, mediante la cual se declararon no probadas las excepciones propuestas por los demandados, excepto el medio defensivo de concurrencia de culpa de la víctima; por lo que se declaró la responsabilidad civil extracontractual de los demandados de manera solidaria y se condenó al pago de perjuicios extrapatrimoniales a favor de los demandantes, con una reducción del 20% y; finalmente, se negaron las pretensiones en contra de la aseguradora llamada en garantía.

Sobre la prescripción consideró la *a quo* que aplica la regla general de 10 años, pero en el caso operó la interrupción de esta por la presentación de la demanda y su notificación al extremo pasivo conforme lo dispuesto en el artículo 94 CGP, toda vez que la demandada Transportes Futuro Limitada fue notificada dentro del año siguiente a la admisión de la demanda y que tal interrupción se extiende a los demás demandados en virtud de la solidaridad existente entre ellos conforme a lo previsto en el artículo 2344 del Código Civil, que la consagra en materia de responsabilidad civil extracontractual, sumado a que, la nulidad decretada por indebida notificación sólo se refirió a la de los demás codemandados, lo que en nada afecta la fecha de notificación que se tomó como referencia para contar el término indicado<sup>10</sup>.

De la causa del deceso de Pedro Antonio Giraldo Vásquez, concluyó que ocurrió como consecuencia de las lesiones sufridas en el accidente de tránsito, pues si bien en la historia clínica se relacionaron como diagnósticos “*fractura de cadera izquierda y alto riesgo de complicaciones*

<sup>8</sup> Ibid. Archivos 008-2017-00247 CUADERNO 3 y 008-2017-00247 CUADERNO 4

<sup>9</sup> Ver ruta carpeta 01. ExpedienteRecibido / Archivo 2017-00247 INSTRUCCION Y JUZGAMIENTO (1)

<sup>10</sup> Ibid. Min. 6:19 en adelante

como TEP<sup>11</sup> y TVP<sup>12</sup> por encontrarse en reposo", siendo necesario remitirlo a una clínica de mayor nivel, lo cierto es que la atención primaria se dio por causa del accidente de tránsito, debiendo ser hospitalizado y, que no existe evidencia alguna de que previo al accidente, pese a tener EPOC<sup>13</sup> hubiese tenido disneas ni requerido de oxígeno; por lo que no hay prueba de que esos antecedentes médicos fueran la causa del deceso, resultando conclusivo el dictamen de medicina legal que determinó que la muerte "es secundaria a neumonía por la fractura de cadera izquierdo y fémur izquierdo en incidente de transporte"<sup>14</sup>.

Para determinar la reducción de la indemnización, estimó que "para que se produjera el accidente era necesario que la víctima se encontrara en la vía", y ello conlleva a establecer que este no tuvo el debido cuidado ni cruzó por las zonas permitidas, pero que el hecho de tratarse de un anciano no lo obligaba a estar acompañado de otra persona, pues la Corte Constitucional determinó que esta norma no es sancionatoria<sup>15</sup>. Entonces, contrastado el actuar de la víctima con el deber de cuidado del conductor del vehículo, concluyó que frente a las dimensiones del automotor al tratarse de una camioneta tipo furgón que obstaculiza la visibilidad, la prohibición de realizar maniobras de retroceso en la vía y su mayor responsabilidad en la actividad, era dable determinar un porcentaje de participación causal de un 80% para el conductor y 20% para la víctima.

Del llamamiento en garantía, declaró probada la prescripción extintiva contra la asegurada, partiendo de la citación a audiencia de conciliación extracontractual y, precisó que la pretensión tampoco estaría llamada a prosperar, en virtud de la excepción a la cobertura de la póliza, pues lo reclamado son perjuicios extrapatrimoniales.

#### 1.4 TRÁMITE DE LA APELACIÓN.

La sentencia de primera instancia fue proferida en audiencia, notificada en estrados e inmediatamente fue apelada por la parte demandante y los demandados, precisando estos últimos verbalmente los reparos frente a la decisión, por lo que se concedió el recurso.

La alzada fue admitida mediante auto del 25 de junio de 2021<sup>16</sup> y se dio aplicación al artículo 14 del Decreto Legislativo 806 de 2020<sup>17</sup>, concediéndole a los apelantes la oportunidad para sustentar el recurso,

---

<sup>11</sup> Tromboembolismo pulmonar

<sup>12</sup> Trombosis venosa profunda

<sup>13</sup> Enfermedad pulmonar obstructiva crónica

<sup>14</sup> Ver ruta Carpeta 01. Expediente Recibido / Archivo 008-2017-00247 CUADERNO 1 PRINCIPAL / Informe pericial de necropsia de Medicina Legal Pág. 263-267.

<sup>15</sup> Sentencia C-177 de 2016

<sup>16</sup> Ver archivo 04. 21-06-25 008 2017 00247 AS ADMITE APELACIÓN MPB

<sup>17</sup> Mediante la Ley 2213 de 2022, se acogió como legislación permanente las disposiciones de dicho decreto para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, la ley conserva en el artículo 12 la disposición del artículo 14 del decreto en cuanto al trámite de la apelación de sentencias en materia civil y familia.

quienes hicieron uso de ello y, habiendo remitido copia a la contraparte, no se presentó réplica alguna<sup>18</sup>.

## 2. CONTROL DE LEGALIDAD Y COMPETENCIA DEL SUPERIOR.

En atención a lo dispuesto en el numeral 12 del artículo 42 y en el artículo 132 del Código General del Proceso, se aprecian reunidos los presupuestos procesales para emitir sentencia porque se verificó la demanda en forma y su trámite adecuado, la competencia del juez, la capacidad para ser parte y acudir al proceso respecto de los extremos del litigio y, no se advierten vicios ni irregularidades que configuren nulidad.

Por disposición del artículo 328 de la misma obra, salvo decisiones que se deban adoptar de oficio o complementar en los términos del artículo 287, esta sala limita el análisis a los reparos concretos efectuados por los apelantes en contra de la decisión de primera instancia.

## 3. REPAROS CONCRETOS.

### 3.1 Reparos de la parte demandante<sup>19</sup>.

Con el propósito de que se revoque la decisión de primera instancia de declarar la culpa compartida de la víctima, la parte actora formuló el siguiente reparo, sustentado en segunda instancia:

**3.1.1 Indebida valoración probatoria.** Atribuye falencias por la valoración del testimonio de Darío Antonio Rojo García, quien afirmó ser el copiloto del vehículo, pese a que el demandado Nicolás Alberto aseveró ante la autoridad de tránsito que "*iba solo*" y en su interrogatorio indicó que el ayudante no se encontraba con él al momento del accidente. Asimismo, criticó que se valorara el croquis elaborado por la autoridad de tránsito, cuando se afirmó por el mismo demandado que él levantó a Pedro Antonio del suelo tras la colisión y lo sentó en una acera, de manera que no existe prueba alguna del lugar de la vía donde se encontraba la víctima al momento del accidente, pues sólo se cuenta con la versión del conductor, de tal manera, no era viable deducir la participación de la víctima en el accidente.

### 3.2 Reparos del codemandado Nicolás Alberto Lopera<sup>20</sup>.

Con el propósito de que se revoque la decisión de primera instancia y en su lugar se acojan las excepciones propuestas, el codemandado opuso los siguientes reparos:

---

<sup>18</sup> Ver archivo 010. IngresoAlDespacho22Julio2021-1

<sup>19</sup> Ver ruta Carpeta 01. ExpedienteRecibido / Archivo 008-2017-00247 CUADERNO 1 PRINCIPAL Pág 417-418 y sustentación ver carpeta 08. MemorialJulio7De2021 / archivo SUSTENTACIÓN RECURSO DE APELACIÓN (1)

<sup>20</sup> Ibid. pág. 407-415 y sustentación ver carpeta 07. MemorialJulio7De2021 / archivo sustentación\_apelación\_sentencia\_nicolas\_lopera

**3.2.1 Indebida aplicación normativa.** Acusó la decisión de extender los efectos de la interrupción de la prescripción que operó en contra del codemandado Transportes Futuro a los demás demandados en virtud de la solidaridad entre los mismos, sin considerar que procesalmente las partes componen un litisconsorcio facultativo, por lo que los actos de cada litigante tienen efectos diferentes y no redundan en provecho o perjuicio de los otros, y considerando la fecha del accidente de tránsito, la de presentación de la demanda y la fecha de notificación por conducta concluyente, es claro que no fue notificado dentro del año siguiente del auto admisorio de la demanda, por lo que no operó para él la interrupción de la prescripción.

**3.2.2 Indebida valoración probatoria.** Atacó la decisión en la valoración de los siguientes aspectos:

- Haber fundado la declaración de existencia de nexo causal entre el accidente y la muerte de Pedro Antonio, basándose únicamente en el informe pericial de necropsia de Medicina Legal, pese a que en aquel se informa que ocurrió como causa de una neumonía, estando soportado en la historia clínica que se trataba de un paciente con tabaquismo activo "*40 cigarrillos al día aproximadamente*", y que en el curso de la atención en salud sufrió afecciones y dificultades respiratorias.
- No valorar todas las conductas violatorias de las normas de tránsito de parte de la víctima, ni el fallo contravencional, y concluir que por la incidencia de este en el accidente sólo correspondía una reducción del 20%.

### **3.3 Reparos de la codemandada Ángela María Gallego<sup>21</sup>.**

Con igual propósito del anterior, la codemandada opuso los siguientes reparos:

**3.3.1 Indebida aplicación normativa.** Reprochó la decisión de extender los efectos de la interrupción de la prescripción que operó en contra del codemandado Transportes Futuro a los demás demandados en virtud de la solidaridad entre los mismos, sin considerar que procesalmente las partes componen un litisconsorcio facultativo, por lo que los actos de cada litigante tienen efectos diferentes y no redundan en provecho o perjuicio de los otros y, así el artículo 94 CGP establece que cuando fueren varios los demandados y existiere este litisconsorcio, los efectos de la notificación a que se refiere esa norma se surtirán para cada uno separadamente. Lo que condujo a que no se decretara la prescripción extintiva alegada en su favor.

**3.3.2 Indebida valoración probatoria.** Atacó la decisión en la valoración de los siguientes aspectos:

---

<sup>21</sup> En audiencia y pág. 420

- Dar por demostrado que la causa de la muerte de Pedro Antonio fue el atropellamiento, sin considerar que ese hecho produjo unas lesiones, más no fue la causa eficiente de la muerte, la que estuvo relacionada con una neumonía que desarrolló, tal como se desprende del análisis de la historia clínica donde se evidencian sus antecedentes respiratorios y que las complicaciones médicas se presentaron por estas, presentándose así ausencia del nexo causal, en tanto las pretensiones fueron encaminadas a reconocer perjuicios por el hecho dañoso de la muerte y no por las lesiones.
- No valorar adecuadamente la incidencia de la víctima en la causación del daño, bien como exclusiva por la violación de diversas normas de tránsito, o al menos asignando un porcentaje mayor al 20% reconocido a su participación causal.
- No se tuvo en cuenta en la tasación de los perjuicios la edad adulta del peatón como circunstancia que atenúa el monto de la indemnización, considerando los factores de edad y antecedentes médicos.
- Indebida valoración del régimen de culpa de la propietaria del vehículo, quien no tenía la guarda del automotor, y en consecuencia no se encontraba obligada a responder de manera solidaria.

### **3.4 Problemas Jurídicos.**

Conforme a lo expuesto, corresponde a la Sala establecer:

- a) Si la interrupción de la prescripción en los casos de responsabilidad civil extracontractual, opera para todos los demandados en virtud de la solidaridad existente entre ellos, o debe surtirse separadamente.
- b) Si conforme las pruebas allegadas al proceso, se encuentra acreditado el nexo causal entre el accidente de tránsito y el deceso de la víctima.
- c) Si se acreditó la culpa exclusiva de la víctima en el accidente de tránsito, o en su defecto es dable atribuirle responsabilidad en el accidente y en qué porcentaje.
- d) Si la edad de la víctima tiene incidencia en el monto de la indemnización.
- e) Si la alegada carencia de guarda del vehículo representa para su propietaria una ausencia de responsabilidad en el caso.

## **4. FUNDAMENTO JURÍDICO.**

### **4.1 Prescripción extintiva y su interrupción.**

El artículo 2512 del Código Civil consagra la prescripción como un modo de adquirir las cosas ajenas o de extinguir las acciones o derechos ajenos, bien por haberse poseído aquellos o por no ejercer las acciones en cierto lapso. Sobre estas últimas el artículo 2535 ibidem indica que *"La prescripción que extingue las acciones y derechos ajenos exige solamente cierto lapso de tiempo durante el cual no se hayan ejercido dichas acciones"* y que este tiempo se cuenta desde que la obligación se haya hecho exigible, siendo para la prescripción de acciones ordinarias el término de 10 años, según el artículo 2536.

La prescripción extintiva de las acciones, que es la que interesa al caso, siendo consecuencia del transcurso de un lapso determinado en la ley sin que su titular los haya ejercido, según ha indicado la Corte:

*"... se supedita a que la acción sea prescriptible, que es la regla general; a que transcurra el tiempo legalmente establecido teniendo en consideración la interrupción y suspensión de que puede ser objeto; y a que el titular del derecho de acción se abstenga en ese tiempo de ejercer el derecho en la forma legalmente prevenida"*<sup>22</sup>

El artículo 2539 del Código Civil establece que la prescripción que extingue las obligaciones puede interrumpirse natural o civilmente, teniendo ocurrencia la última por la demanda judicial, lo que se encuentra regulado en el artículo 94 del CGP, que dispone que la presentación de la demanda interrumpe el término de prescripción, siempre que el auto admisorio se notifique al demandado dentro del año siguiente a partir de la notificación de este al demandante; y cuando son varios los demandados precisa:

*"Si fueren varios los demandados y existiere entre ellos litisconsorcio facultativo, los efectos de la notificación a los que se refiere este artículo se surtirán para cada uno separadamente, salvo norma sustancial o procesal en contrario. Si el litisconsorcio fuere necesario será indispensable la notificación a todos ellos para que se surtan dichos efectos."* (Se resalta)

Por su parte, el artículo 2540 del código civil, establece:

*"La interrupción que obra a favor de uno o varios coacreedores, no aprovecha a los otros, ni la que obra en perjuicio de uno o varios codeudores, perjudica a los otros, **a menos que haya solidaridad**, y no se haya esta renunciado en los términos del artículo 1573, o que la obligación sea indivisible."*

Para el caso de la responsabilidad civil extracontractual derivada de las actividades peligrosas como la conducción de vehículos, la doctrina y jurisprudencia han considerado que se está ante obligaciones solidarias en virtud de lo dispuesto en el artículo 2344 ibidem, según el cual *"Si de un delito o culpa ha sido cometido por dos o más personas, cada una de ellas será*

---

<sup>22</sup> CSJ, sentencia SC6575 del 28 de mayo de 2015, rad. 2007-00115-01



*solidariamente responsable de todo perjuicio procedente del mismo delito o culpa (...)*”

## 4.2 Responsabilidad por actividades peligrosas.

A partir del artículo 2341 del Código Civil, nuestra jurisprudencia ha establecido los tres pilares fundamentales de la responsabilidad civil extracontractual: el daño, la culpa y el nexo de causalidad entre ellos<sup>23</sup>.

Particularmente, con base en el artículo 2356 del mismo estatuto, se ha construido la teoría de la responsabilidad por actividades peligrosas, en virtud de la cual se obliga a reparar el daño a quien se vale de acciones o instrumentos que multiplican el poder del ser humano, elevando con ello su potencial dañino y alterando la simetría de la simple interacción entre particulares. De tal forma que, a modo de contrapeso, nuestro ordenamiento consagra una presunción, calificando la misma norma tal conducta dañina como de malicia o negligencia, circunstancia que en últimas se traduce en un beneficio probatorio para el damnificado, pues, para liberarse de la obligación de reparar, se impone al agente la carga de demostrar alguna causa extraña:

*“Un depósito de sustancias inflamables, una fábrica de explosivos, así como un ferrocarril o un automóvil, por ejemplo, llevan consigo o tienen de suyo extraordinaria peligrosidad de que generalmente los particulares no pueden escapar con su sola prudencia. De ahí que los daños de esa clase se presuman, en esa teoría, causados por el agente respectivo, como sería en estos ejemplos el autista, el maquinista, la empresa ferroviaria, etc. Y de ahí también que tal agente o autor no se exonere de la indemnización, sea en parte en algunas ocasiones, sea en el todo otras veces, sino en cuanto demuestre caso fortuito, fuerza mayor o intervención de elemento extraño.”*<sup>24</sup>

En lo esencial, esta doctrina se ha mantenido por parte de la Corte Suprema de Justicia hasta la actualidad<sup>25</sup>, eso sí, en medio de profundas discusiones acerca de si la presunción referida corresponde a un régimen de responsabilidad subjetiva (presunción de la culpa) o a un régimen de responsabilidad objetiva (presunción de responsabilidad)<sup>26</sup>. Sin embargo,

---

<sup>23</sup> Ver sentencia SC4455-2021 que, entre otras, cita y destaca providencia del 17 de septiembre de 1935 en la que la Corte “sostuvo que, «para que pueda decirse que la **culpa** de una persona ha sido efectivamente la causa del perjuicio cuya reparación se demanda, es menester que haya una **conexión necesaria** entre dicha **culpa** y el **perjuicio**». En el mismo sentido la SC2107-2018 del 12/06/2018: “Esta Corte, con apoyo en el artículo 2341 del Código Civil, ha señalado como presupuestos axiológicos y concurrentes de la responsabilidad extracontractual, denominada también aquiliana, “(i) el perjuicio padecido; (ii) el hecho intencional o culposo atribuible al demandado; y (iii) la existencia de un nexo adecuado de causalidad entre factores””.

<sup>24</sup> Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, 14 de marzo de 1938, MP Ricardo Hinestrosa Daza, G.J. Tomo XLVI, páginas 210-222. Reiterada en las sentencias del 18 de mayo de 1938, MP Fulgencio Lequerica Vélez. G.J. Tomo XLVI, páginas 514-521 y, del 31 de mayo de 1938, MP Liborio Escallón G.J. Tomo XLVI, páginas 559-564.

<sup>25</sup> Ver sentencias SC665-2019, SC4420-2020, SC2111-2021, SC2905-2021.

<sup>26</sup> De las sentencias antes citadas, obsérvese como todas fueron recientemente expedidas, pero mientras que la SC665-2019 se fundamenta en el régimen subjetivo avizorando desde entonces la discusión en la

en medio del debate<sup>27</sup> se han conservado los referidos presupuestos axiológicos de la acción de responsabilidad civil extracontractual derivada del ejercicio de actividades peligrosas<sup>28</sup>.

Conforme a lo previsto por el artículo 167 del CGP, según el cual “*incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen*”, cuando se demanda la responsabilidad civil originada en actividades peligrosas no se requiere probar la culpa del agente y, por tanto, al demandante le corresponde demostrar el ejercicio de la actividad peligrosa por parte del demandado, el daño y su relación de causalidad; mientras que, para liberarse de la obligación resarcitoria, al demandado le compete probar un elemento exclusivo y extraño (fuerza mayor, caso fortuito, intervención de la víctima o de un tercero).

### 4.3 Causalidad.

En términos generales, se entiende por causa “*(a)quello que se considera como fundamento u origen de algo*”<sup>29</sup> y en punto de la responsabilidad por actividades peligrosas este concepto tiene especial relevancia porque, como se acaba de exponer, la única manera de eximirse de ella es rompiendo el nexo de causalidad.

Los artículos 2356 y 2357 del Código Civil son normas en las que la causalidad se deduce de su texto:

**“ARTÍCULO 2356. Por regla general todo *daño que pueda imputarse a malicia o negligencia de otra persona, debe ser reparado por ésta.***

...

**ARTÍCULO 2357. La apreciación del *daño* está sujeta a reducción, si el que lo ha sufrido se expuso a él imprudentemente.”** (Se destaca)

Se puede afirmar que para estructurar la responsabilidad civil derivada de una actividad peligrosa se requiere relación causal entre la conducta del agente y el daño, mientras que para reducir la indemnización

---

aclaración de voto, por su parte las SC4420-2020 y SC2111-2021 sostienen la postura del régimen objetivo y exponen en todo su esplendor la discusión con cuatro aclaraciones de voto que dejan en evidencia la ausencia de unanimidad y, tal vez por ello mismo, la conveniencia de no tocar el asunto en providencias como la SC2905-2021.

<sup>27</sup> El régimen de responsabilidad subjetiva con presunción de culpa puede apreciarse en las sentencias hito del 14 de marzo de 1938 y 31 de mayo de 1938, hasta las más recientes SC5686-2018, SC665-2019 y SC4204-2021. Por su parte, la aplicación del régimen de responsabilidad objetiva basada en la presunción de responsabilidad se expone en las sentencias SC3862-2019, SC4420-2020 y SC2111-2021.

<sup>28</sup> Sentencia SC2905-2021 del 29/07/2021 “En tal eventualidad y con el fin de establecer la responsabilidad deprecada, a la víctima le basta acreditar el ejercicio de la actividad peligrosa desarrollada por su contendiente, el daño que padeció y la relación de causalidad entre aquella y este; al paso que el demandado sólo puede exonerarse demostrando que el perjuicio no fue producido por dicha operación, es decir, que obedeció al devenir de un elemento extraño y exclusivo, como la fuerza mayor o caso fortuito, la intervención de la víctima o la de un tercero, únicas circunstancias que rompen el nexo causal citado.

Es desacertado, entonces, enfocar la defensa alegando la ausencia de culpa de los enjuiciados, toda vez que estos sólo pueden exonerarse de responsabilidad rompiendo la causalidad.”

<sup>29</sup> Diccionario de la Real Academia Española.

correspondiente se requiere relación causal entre el daño y el comportamiento de la víctima; es decir, que la conducta de quien ocasiona y quien sufre el menoscabo pueden confluír en la realización del daño y en tal caso la causalidad resulta determinante tanto de la atribución de responsabilidad como de su exoneración<sup>30</sup>.

Entonces, por encima de las referencias normativas de carácter subjetivo <sup>31</sup>, para estructurar la responsabilidad por actividades peligrosas, desecharla o dosificarla, lo fundamental es la relación de causalidad entre las conductas del agente y de la víctima con respecto al daño, constituyéndose así la causa en el elemento coyuntural para definir si la obligación de reparar recae únicamente en el agente o si la imprudencia de la víctima lo puede liberar total o parcialmente según su intervención (incidencia) <sup>32</sup>.

Es que no basta el actuar culposo de la víctima para configurar una causa extraña, así como tampoco dicha incuria justifica el daño, se requiere que su conducta irreflexiva *concurra efectivamente* en su realización, así lo sostiene la doctrina de la Corte:

*"... cabe concluir que la sola circunstancia de que el perjudicado estuviese desarrollando en el momento del suceso una actividad que en abstracto pudiera merecer el calificativo de imprudente, no es causa de atenuación de la indemnización debida por el agente, pues para tales efectos será menester, y las razones son obvias, que la actividad de la víctima concurra efectivamente con la de aquél en la realización del daño.*

*Así lo ha entendido la corte al expresar que "(...) para que opere la compensación de culpas de que trata el artículo 2357 del Código Civil no basta que la víctima se coloque en posibilidad de concurrir con su actividad a la producción del perjuicio cuyo resarcimiento se persigue, sino que se demuestre que la víctima efectivamente contribuyó con su comportamiento a la producción del daño", pues el criterio jurisprudencial en torno a dicho fenómeno es el de que para deducir responsabilidad en tales supuestos'... la jurisprudencia no ha tomado en cuenta, como causa jurídica del daño, sino la actividad que, entre las concurrentes, ha desempeñado un papel preponderante y trascendente en la realización del perjuicio. De lo cual resulta que si, aunque culposamente,*

---

<sup>30</sup> Sentencia SC7534-2015 del 04/06/2015: "2. La culpa exclusiva de la víctima, como factor eximente de responsabilidad civil, ha sido entendida como la conducta imprudente o negligente del sujeto damnificado, que por sí sola resultó suficiente para causar el daño. Tal proceder u omisión exime de responsabilidad si se constituye en la única causa generadora del perjuicio sufrido, pues de lo contrario solo autoriza una reducción de la indemnización, en la forma y términos previstos en el artículo 2357 del Código Civil.". En el mismo sentido la SC10808-2015 del 13/08/2015 y la SC8209-2016 del 21/06/2016.

<sup>31</sup> Para la estructuración de la responsabilidad, el artículo 2356 refiriéndose a la malicia o negligencia del agente y para la apreciación del daño, el artículo 2357 remitiéndose a la imprudencia de la víctima.

<sup>32</sup> Sentencia SC4232-2021 del 23/09/2021 en la que citando la SC5125-2020 del 15/12/2020, afirma: "La también denominada compensación de culpas es una forma de causalidad, que en verdad no califica la negligencia o imprudencia del sujeto, sino el grado en que su conducta incidió en el daño."

*el hecho de determinado agente fue inocuo para la producción del accidente dañoso, el que no habría ocurrido si no hubiese intervenido el acto imprudente de otro, no se configura el fenómeno de la concurrencia de culpas, que para los efectos de la graduación cuantitativa de la indemnización consagra el artículo 2357 del Código Civil. En la hipótesis indicada sólo es responsable, por tanto, la parte que, en últimas, tuvo oportunidad de evitar el daño y sin embargo no lo hizo" (CLII, 109. - Cas. 17 de abril de 1991)."*<sup>33</sup>

Para la identificación de la causa adecuada, cuando se discute la concurrencia, la Corte ha indicado que tal asunto "se resuelve en el campo objetivo de las conductas de víctima y agente"<sup>34</sup> y explica:

*"Cuanto mayor sea la probabilidad, superior es la cuota de causalidad y su repercusión en la realización del resultado. De esa manera, se trata de una inferencia tendiente a establecer "el grado de interrelación jurídica entre determinadas causas y consecuencias"*<sup>35</sup>.

*En rigor, cuando la causa del daño corresponde a una actividad que se halla en la exclusiva esfera de riesgo de uno de los sujetos, éste será responsable único, y a contrario sensu, concurriendo ambas, se determina su contribución para atenuar el deber de repararlo.*

*De esta manera, el juzgador valorará la conducta de las partes en su materialidad objetiva y, en caso de encontrar probada también una culpa o dolo del afectado, establecerá su relevancia no en razón al factor culposo o doloso, sino al comportamiento objetivamente considerado en todo cuanto respecta a su incidencia causal."*<sup>36</sup>

Recientemente, en la sentencia SC3604-2021<sup>37</sup> la Corte desarrolló este método de análisis e identificación de la causa adecuada, precisando que comprende dos etapas<sup>38</sup>: i) la **etapa fáctica**, en la que se seleccionan las condiciones materiales relevantes, necesarias, lógicas y suficientes para la

<sup>33</sup> Sentencia Expediente No. 4972 del 06/05/1998, citada en la SC2107-2018 del 12/06/2018, en la que además se precisa que la concurrencia de culpas en la producción del daño se denomina concausalidad.

<sup>34</sup> Sentencia SC2107-2018 del 12/06/2018.

<sup>35</sup> LANGE, Schadenersatz, "Handbuch des Schuldrecht in Einzeldarstellungen Bd.1" (Manual de ley de obligaciones). Tübingen, Mohr, 1979.

<sup>36</sup> Ibidem.

<sup>37</sup> Rad 47001-31-03-005-2016-00063-01 del 25/08/2021.

<sup>38</sup> Se explica en la sentencia: "La generalidad de los sistemas jurídicos occidentales admiten la necesidad de desarrollar el análisis de causalidad en dos fases diferenciadas. La primera, conocida como causalidad fáctica, o causalidad de hecho, tiene por objeto identificar, en sentido material, si una actividad es condición necesaria para la producción del hecho dañoso; la segunda, que suele denominarse como causalidad jurídica, o alcance de la responsabilidad busca atribuir, a través de criterios normativos, la categoría de causa a una de esas condiciones antecedentes –como directiva para imputar a su autor las secuelas de la interacción lesiva–."

realización del daño, sin valoración jurídica<sup>39</sup> y; ii) la **etapa jurídica**, en la que se seleccionan esas condiciones materiales para extraer solamente aquellas que tienen relevancia para ser subsumidas en una norma positiva que permite atribuir las consecuencias dañinas a un sujeto<sup>40</sup>.

Pero no basta con estas dos fases de análisis, principalmente y teniendo en cuenta la crítica a la teoría de la causalidad adecuada<sup>41</sup>, la providencia enfatiza en la necesidad del **criterio de regularidad causal**, que corresponde a que solo pueden ser consideradas causas jurídicas de un perjuicio los acontecimientos que, eliminando el elemento volitivo, deberían producirlo normalmente (probabilidad), es decir, excluyendo el azar, distinguiendo entre lo fortuito y lo previsible, de tal forma que lo predecible está bajo la esfera de dominio del individuo racional y por tanto es admisible asignar responsabilidades cuando era posible pronosticar con anticipación el potencial dañino que implicaba el descuido<sup>42</sup>.

En suma, se trata de establecer, a partir de las condiciones fácticas relevantes y de las normas jurídicas en las que ellas se subsumen para imputar el daño, pero sin consideración a las condiciones subjetivas de los involucrados, la causa que previsiblemente lo ocasionó, es decir, con base en criterios de probabilidad y regularidad existentes al momento de su ocurrencia.

## 5. CASO CONCRETO.

### 5.1 De la prescripción extintiva.

Se tiene acreditado que el accidente de tránsito del que se derivó el perjuicio que se reclama en el presente trámite tuvo ocurrencia el 30 de mayo de 2007, pues así lo afirmaron los demandantes, fue confesado por los demandados y, consta en informe policial de accidentes de tránsito N°

---

<sup>39</sup> Ibidem "Expresado de otra forma, en esta primera etapa del análisis causal simplemente se seleccionan, de entre el conjunto de acontecimientos que antecedieron a un hecho, aquellos que son imprescindibles para que este se produjera, y que, por lo mismo, pueden considerarse razonablemente como sus "causas materiales", o más propiamente, como condiciones causales relevantes del resultado."

<sup>40</sup> Ibidem "Ello es así porque las condiciones causales relevantes pertenecen a la esfera de los hechos, razón por la cual su relevancia intraprocesal dependerá de la posibilidad de subsunción en las complejas reglas que determinan cuándo es viable atribuir a una persona las secuelas de un resultado dañoso en cuya producción intervino materialmente\*. En ese escenario, es ineludible acudir al ordenamiento en procura de las herramientas teóricas que permitan establecer si una condición causal concreta es apta para justificar la asignación de un débito indemnizatorio, o lo que es lo mismo, si puede considerarse como la causa jurídica relevante de dicho resultado."

<sup>41</sup> Ibidem "Esta concepción de la causalidad, sin embargo, parece confundirse con la noción de culpa, y de hecho, en esta similitud se concentran los críticos del criterio de adecuación. De ahí que, para intentar destacar los rasgos diferenciales de ambos conceptos, se propusiera juzgar la previsibilidad del acto a partir de la información objetiva con la que se contaba al momento del daño, dejando de lado las creencias subjetivas del agente dañador."

<sup>42</sup> Ibidem. Sostiene la Corte: "En conclusión, de entre las múltiples directivas jurídicas postuladas para guiar la selección entre condiciones antecedentes necesarias para la producción del daño, la jurisprudencia patria suele valerse –explícita o implícitamente– del criterio denominado causa adecuada, según el cual el agente debe ser considerado responsable «solo del daño que resulta regularmente y de acuerdo con el curso normal de las cosas de la conducta o actividad desplegada»<sup>42</sup>, teniendo en cuenta variables como la previsibilidad, la cercanía temporal entre la conducta y el daño, o la entidad de este en relación con las secuelas de aquella, entre otras."

A013554<sup>43</sup>. Asimismo, que la demanda fue presentada el 15 de mayo de 2017<sup>44</sup>, admitida en providencia del 25 de junio y notificada en estados del 31 de julio del mismo año <sup>45</sup>; surtiéndose la notificación personal de la demandada Transportes Futuro Limitada el 7 de septiembre de igual anualidad<sup>46</sup>.

Los codemandados Ángela María Gallego y Nicolás Alberto Lopera, se tuvieron notificados por conducta concluyente en providencia del 13 de junio de 2019<sup>47</sup>, en cumplimiento a lo dispuesto por este Tribunal<sup>48</sup>, al decretar la nulidad por indebida notificación frente a aquellos, por incuria de la demandante, por lo que en su defensa se opusieron a la prosperidad de las pretensiones en su contra aduciendo como principal medio exceptivo la prescripción de la acción, pues consideraron que frente a ellos esta no se interrumpió en legal forma y para el momento en que fueron notificados habían transcurrido más de 10 años desde la ocurrencia del accidente. En consecuencia, formularon reparo en este sentido frente a la sentencia proferida en primera instancia, por cuanto la *a quo* no declaró la prosperidad de esta excepción, aduciendo que la interrupción que operó en virtud de la notificación a la codemandada Transportes Futuro Limitada se extendía a ellos en atención a la solidaridad que los une por el tipo de pretensión.

De los efectos de la solidaridad y su relación con la interrupción de la prescripción, ha precisado la doctrina:

*“Si la obligación es de sujetos plurales, la interrupción de la prescripción que favorece a uno de los acreedores no beneficia a los demás, ni la que perjudica a uno de los deudores perjudica a los otros. Pero si la obligación es pasivamente solidaria, interrumpida la prescripción respecto de uno de los codeudores, se interrumpe respecto de los demás, y si es activamente solidaria, la interrupción beneficia a todos los coacreedores.”*<sup>49</sup> (Se destaca)

Conforme a la disposición contenida en el artículo 94 del CGP, la interrupción civil de la prescripción de las acciones, tiene lugar con la presentación de la demanda cuando esta es notificada a los demandados dentro del año siguiente a la providencia que la admite, sin embargo, la misma disposición en su inciso cuarto establece la forma en que aquella aplica cuando existe pluralidad de demandados, diferenciando el tipo de litisconsorcio que se presente; así para el facultativo, dispone que los efectos de la notificación se surten para cada uno separadamente “*salvo*

---

<sup>43</sup> Ver ruta Carpeta 01. Expediente Recibido / Archivo 008-2017-00247 CUADERNO 1 PRINCIPAL Pág. 44-46

<sup>44</sup> Ibid. Pág. 1

<sup>45</sup> Ibid. Pág. 69

<sup>46</sup> Ibid. Pág. 70

<sup>47</sup> Ibid. Pág. 320

<sup>48</sup> Carpeta Ibid. Archivo 008-2017-00247 CUADERNO 2 (SEGUNDA INSTANCIA) Providencia del 7 de mayo de 2019, Pág. 2-8.

<sup>49</sup> Ospina Fernández, Guillermo. Régimen General de las Obligaciones. Editorial Temis S.A., séptima edición. Bogotá 2001. Pág. 476.

*norma sustancial o procesal en contrario*", mientras que en el necesario se requiere la notificación de todos para que se surtan los efectos de la interrupción.

Establecida la excepción antedicha, así como los efectos de la interrupción de la prescripción consagrados en el artículo 2540 del Código Civil, donde se dispone que la que obra frente a unos no perjudica a los otros *"a menos que haya solidaridad"*, y la irrefutable solidaridad existente entre los diferentes llamados a responder en situaciones como la responsabilidad civil extracontractual por accidentes de tránsito, encuentra la Sala que pese a que en el presente caso se presente un litisconsorcio facultativo, los efectos de la interrupción de la prescripción que operaron por la notificación al codemandado Transportes Futuro Ltda. dentro del año siguiente a la admisión de la demanda, se comunica a los demás codemandados por regla de excepción.

En consecuencia, la Sala estima acertada la decisión de primera instancia en este sentido, por lo que confirmará la improperidad de la excepción de prescripción extintiva propuesta por los codemandados Ángela María Gallego y Nicolás Alberto Lopera.

## 5.2 Del nexa causal

Se encuentra acreditado que en el accidente de tránsito ocurrido el 30 de mayo de 2007 resultó lesionado Pedro Antonio Giraldo Vásquez, pues así fue narrado por los demandantes, y confesado por el conductor del vehículo, quien además en el trámite contravencional adelantado por la Secretaría de Transportes y Tránsito de Medellín precisó que había iniciado la marcha en reversa con el vehículo *"cuando sentí un golpe en el furgón paré, cuando me bajo y veo el señor en el suelo lo recogí"*, y que al llegar la familia de aquel *"lo llevamos al hospital"*. Seguidamente, frente a la pregunta sobre las lesiones del peatón afirmó: *"fractura de cadera, solamente esto, fue remitido al hospital la MARÍA él estuvo hospitalizado (...) "* y finaliza indicando que posteriormente se dio cuenta de que había fallecido a los quince o veinte días después<sup>50</sup>.

Se probó igualmente, con el informe pericial de necropsia, que la muerte de Pedro Antonio *"es secundaria a neumonía por la fractura de cadera izquierda y fémur izquierdo en incidente de transporte"*<sup>51</sup>:

OPIA **INFORME PERICIAL DE NECROPSIA N°. 2007010105001000927**  
hallazgos:

1. hematomas en fosa iliaca izquierda y en region lumbar izquierda
2. fractura de cadera izquierda y femur izquierdo
3. neumonia

Los hallazgos de la necropsia y la informacion disponible nos orientan a que la muerte de GIRALDO VASQUEZ PEDRO ANTONIO es secundaria a neumonia por la fractura de cadera izquierda y femur izquierdo en incidente de transporte.

<sup>50</sup> Ver ruta carpeta 01. ExpedienteRecibido / Archivo 008-2017-00247 CUADERNO 1 PRINCIPAL Pág. 54-56.

<sup>51</sup> Ibid. Pág. 263-267

Discuten los demandados que la causa de la muerte de la víctima no tiene relación causal con el accidente de tránsito, en la medida que el informe de necropsia da cuenta de que esta se produjo por una neumonía que desarrolló, por lo que las lesiones sufridas en el accidente de tránsito no fueron la causa eficiente de su muerte, máxime si se tiene en cuenta que del análisis de la historia clínica se desprende que aquel tenía antecedentes respiratorios y que las complicaciones médicas se presentaron por estos.

De la historia clínica de la atención de urgencias aportada, se destaca que al ingreso a las 15:55 horas del 30 de mayo de 2007, no se refiere la toma de medicamentos, ni problemas respiratorios del paciente, y en la anotación realizada a las 21:00 se advierte *"alto riesgo de complicaciones como TEP<sup>52</sup>, TVP<sup>53</sup>, por encontrarse en reposo y fractura de cadera"*, y que *"refiere intenso dolor, disnea y AP EPOC"* <sup>54</sup>. Situaciones estas que llevaron a que se produjera la remisión del paciente para un hospital de mayor nivel donde pudiera ser tratado.

Por su parte, de la historia clínica del Hospital General de Medellín, se subraya que el paciente ingresa el 01 de junio de 2007 del Hospital La María *"causa externa: accidente de tránsito"*, y en el resumen de ingreso se precisa que se encuentra *"obnubilado, somnoliento, no responde al interrogatorio, con trauma en extremidades"*; y como diagnóstico de egreso se refiere que *"Fallece el 10/06/07, neumonía basal y fractura de cadera."* <sup>55</sup>

Finalmente, del informe pericial de necropsia en la descripción del examen interior se resalta:

**SISTEMA RESPIRATORIO**

**CAVIDAD TORÁCICA:** hematoma de 4 cm en la region de hemitorax derecho, mide 4 cm

De lo expuesto, se advierte la relación causal entre el accidente de tránsito y el fallecimiento de Pedro Antonio, en primer lugar, porque así lo indicó el informe de medicina legal al dictaminar la muerte como *"secundaria a neumonía por la fractura de cadera izquierda y fémur izquierdo en incidente de transporte"*; lo que sumado a la anotación del mismo dictamen en la que se precisa que tenía un *"hematoma de 4 cm en la región de hemitórax derecho"*, y a lo evidenciado en las historias clínicas aportadas sobre el estado de salud del paciente al ingresar a urgencias, otorgan convicción de tal relación, máxime si se tiene en cuenta que el decaimiento de su estado de salud tuvo lugar durante la atención hospitalaria, llevándolo a fallecer 11 días después del accidente, sin que siquiera pudiera realizarse corrección de la fractura, precisamente por las complicaciones que sufrió.

La causa del fallecimiento de Pedro Antonio dista de los requisitos de una causa extraña, necesaria para que los demandados se liberen de la responsabilidad endilgada, la cual pretendió cuestionarse con los

---

<sup>52</sup> Tromboembolismo pulmonar

<sup>53</sup> Trombosis venoso profunda

<sup>54</sup> Ibid. Pág. 246-261

<sup>55</sup> Ver carpeta ibid. Subcarpeta *HISTORIA CLÍNICA A FOLIOS 234*



antecedentes médicos de aquel, sin que se lograra probar que estos por sí solos hubieran causado la muerte, principalmente porque ninguna actividad probatoria se desarrolló en pro de ello.

Así las cosas, esta Sala estima la improsperidad del medio exceptivo, y en consecuencia confirmará la sentencia recurrida en este aspecto.

### **5.3 De la incidencia causal de la víctima.**

Adujo la parte demandante en su apelación la indebida valoración probatoria por parte de la *a quo*, por haber derivado responsabilidad de la conducta de la víctima y reducir la indemnización por su participación causal, sin que existan pruebas que lo soporten. Y de otra parte, los demandados consideraron que no fueron valoradas todas las conductas violatorias de normas de tránsito por parte de la víctima para concluir en una mayor incidencia causal.

Revisada la audiencia, se aprecia que la exposición argumentativa de la juez de instancia al respecto se fundó en la valoración de la violación de las normas de tránsito tanto por parte del conductor del vehículo, como de la víctima, a partir de lo cual consideró la incidencia causal de uno y otro en el accidente, y determinó los porcentajes atribuidos para concluir en una reducción de la indemnización en un 20%.

La Sala considera que la decisión debe ser confirmada, en tanto la *a quo* expuso criterios normativos y lógicos en cuanto a la ponderación de la incidencia de las conductas de víctima y conductor, dando a cada una de ellas un peso dentro del accidente, acorde a la jurisprudencia aplicable.

Ciertamente, los hechos descritos se subsumen en los precisos preceptos de la Ley 769 de 2002 (Código Nacional de Tránsito Terrestre CNTT), cuerpo normativo vigente para el momento de la ocurrencia del accidente, que en su título III establece las normas de comportamiento en el tránsito.

La conducta del conductor del automóvil infringió el deber del artículo 55<sup>56</sup>, que le exigía abstenerse de poner en riesgo a los demás actores viales, conocer y cumplir las normas y señales de tránsito y también el deber del artículo 69<sup>57</sup> que prohíbe realizar maniobras de retroceso en las vías públicas, situaciones que sumadas al deber de cuidado que le impone la conducción de un vehículo de las proporciones de un furgón y la reducida visibilidad que ello implica, lo hacen responsable en mayor medida.

---

<sup>56</sup>ARTÍCULO 55. COMPORTAMIENTO DEL CONDUCTOR, PASAJERO O PEATÓN. Toda persona que tome parte en el tránsito como conductor, pasajero o peatón, debe comportarse en forma que no obstaculice, perjudique o ponga en riesgo a las demás y debe conocer y cumplir las normas y señales de tránsito que le sean aplicables, así como obedecer las indicaciones que les den las autoridades de tránsito.

<sup>57</sup> ARTÍCULO 69. RETROCESO EN LAS VÍAS PÚBLICAS. No se deben realizar maniobras de retroceso en las vías públicas, salvo en casos de estacionamiento o emergencia. (...)

La conducta del peatón infringió el artículo 57<sup>58</sup>, que le exigía cruzar la vía vehicular cerciorándose de que no existía peligro para hacerlo, y el artículo 58<sup>59</sup> que le imponía cruzar por las zonas autorizadas, como puentes peatonales, pasos peatonales, o en su defecto las bocacalles<sup>60</sup>; conducta que no fue objeto de controversia dentro del proceso, en tanto la misma parte demandante aportó el croquis contenido en el informe policial de accidentes de tránsito, sin controvertir en forma alguna el lugar del accidente allí demarcado, tomándolo como hecho cierto para referir el lugar del accidente y aquel claramente establece que el cruce del peatón no se estaba realizando por zonas autorizadas.

De tal manera que la conducta del peatón tuvo influencia en la realización del accidente de tránsito, y en esa medida era dable dar aplicación a la disminución de la indemnización tal como se declaró en la sentencia recurrida.

#### 5.4 Del monto de los perjuicios morales

La trasgresión del deber de cuidado que ocasiona daño a derechos ajenos puede tener efectos tanto en el ámbito patrimonial como extrapatrimonial de la víctima, de allí que la obligación de responder por la lesión causada a los diferentes bienes jurídicos tutelados no se limite a lo material (artículos 1613 y 1614 CC), sino que se extienda a lo inmaterial, esfera en la que el daño es inasible, inmensurable e imposible de percibir directamente por terceros, al punto que, se puede afirmar que tal tipo de lesión no se puede reparar y por ello la respuesta que hasta ahora ha podido ofrecer nuestro ordenamiento jurídico es meramente económica y compensatoria, pero jamás resarcitoria y se basa simplemente en el sentido de solidaridad, apoyo y empatía, en procura de que la valoración del daño sea integral y equitativa (artículo 16 Ley 446 de 1998).

Así sucede cuando el daño se proyecta y afecta las emociones y sentimientos de la persona. Las sensaciones de aflicción, congoja, desilusión, tristeza, etcétera, pueden ser percibidas en sus manifestaciones externas que pueden ser captadas por las demás personas, pero jamás podrán ser percibidas directamente por ningún tercero y menos por el juez, pues corresponden con exclusividad a la interioridad del propio ser humano que las padece y, por ello, los demás apenas podemos procurar ser comprensivos de tales sufrimientos.

---

<sup>58</sup> ARTÍCULO 57. CIRCULACIÓN PEATONAL. *El tránsito de peatones por las vías públicas se hará por fuera de las zonas destinadas al tránsito de vehículos. Cuando un peatón requiera cruzar una vía vehicular, lo hará respetando las señales de tránsito y cerciorándose de que no existe peligro para hacerlo.*

<sup>59</sup> ARTÍCULO 58. Los peatones no podrán: (...)

*Invadir la zona destinada al tránsito de vehículos, ni transitar en ésta en patines, monopatines, patinetas o similares.*

***Dentro del perímetro urbano, el cruce debe hacerse sólo por las zonas autorizadas, como los puentes peatonales, los pasos peatonales y las bocacalles.*** (Se resalta)

<sup>60</sup> Ley 769 de 2002. Artículo 2 Definiciones: Bocacalle: embocadura de una calle en una intersección.

Esta realidad, fundada en las reglas de la experiencia, ha permitido a la jurisprudencia construir la presunción de daño en la víctima directa y en las víctimas indirectas que conforman su círculo familiar más cercano:

*"el parentesco y más concretamente el primer círculo familiar, ha sido un fuerte indicador para derivar de allí la inferencia o presunción de que, en razón de los afectos que en ese entorno se generan, la muerte, la invalidez o los padecimientos corporales de unos integrantes hiere los sentimientos de los otros por esa cohesión y urdimbre de que se habla -surgiendo así por deducción la demostración de la existencia y la intensidad del daño moral-"*<sup>61</sup>

En el presente asunto alegó la codemandada Ángela Gallego, que para la tasación del monto del daño moral debió tenerse en cuenta tanto la edad adulta del peatón como sus antecedentes médicos como circunstancias que atenúan el monto de la indemnización. Sin embargo, la Sala considera que tales argumentos son irrelevantes, porque aun cuando la jurisprudencia ha considerado la edad de la víctima para la tasación del daño, ello ocurre exclusivamente cuando se refiere al lucro cesante, en virtud de esa imposibilidad que supondría seguir generando este tras el fallecimiento.

El daño moral, como se indicó, invade la esfera personal en tanto se proyecta y afecta las emociones y sentimientos de la persona, sin que exista fundamento alguno que justifique que la edad de la víctima o sus antecedentes médicos reduzcan esos sentimientos en las personas que conforman su círculo familiar; resulta muy cuestionable y falto de respaldo argüir que a un hijo le duela menos la muerte de su padre porque era un adulto mayor, sobre todo cuando esta no se da por causas naturales.

Las excepciones al reconocimiento de este perjuicio, o su tasación, se han limitado a casos en los que los lazos familiares por diversas razones se han roto o nunca han existido y, por tanto, el daño emocional es nulo o mínimo, circunstancias que, por extrañas, deben ser demostradas por quien las alega, conforme a la regla del artículo 167 del CGP, lo que no aconteció en el presente caso, donde la demandada se limitó a solicitar la reducción pretendida sin justificación en este sentido, por lo que no está llamado a ser acogido el medio defensivo y la decisión de primera instancia será confirmada.

## **5.5 De la responsabilidad del propietario del vehículo**

En materia de guarda, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha reconocido sus diferentes orígenes:

*"5.- Sobre la cuestión de quién debe responder por el ejercicio de una actividad peligrosa, como lo es la de conducir vehículos*

---

<sup>61</sup> CSJ, sentencia SC 5686 del 19 de diciembre de 2018, rad. 2004-00042-01.

*automotores, se han expuesto diferentes tesis como son la del aprovechamiento económico, la de la guarda jurídica y la de la guarda material.*

*La Sala, en línea de principio, ha tomado partido por la última, como quedó plasmado en sentencia de 4 de abril de 2013, exp. 2002-09414-01, cuando señala que "en los casos de responsabilidad extracontractual o aquiliana, le compete al demandante acreditar los presupuestos de su pretensión, y si como fuente de aquella existe una actividad de las denominadas peligrosas, éste se releva de acreditar la incuria o imprudencia de quien aspira obtener el resarcimiento, pues en desarrollo del artículo 2356 del Código Civil, le resulta suficiente demostrar, a más del responsable del menoscabo, el acaecimiento del daño y que el mismo se produjo en desarrollo de una actuación de tales características (...) A este respecto, la Corte ha precisado que 'El responsable por el hecho de las cosas inanimadas es su guardián, o sea quien tiene sobre ellas el poder de mando, dirección y control independientes. **Y no es cierto que el carácter de propietario implique necesaria e ineludiblemente el de guardián, pero si lo hace presumir como simple atributo del dominio, mientras no se pruebe lo contrario.** ... O sea, la responsabilidad del dueño por el hecho de las cosas inanimadas proviene de la calidad que de guardián de ellas presúmesese tener. Y la presunción de guardián puede desvanecerla el propietario si demuestra que transfirió a otra persona la tenencia de la cosa en virtud de un título jurídico, como el de arrendamiento, el de comodato, etc., o que fue despojado inculpablemente de la misma, como en el caso de haberle sido robada o hurtada (...)'* (sentencia de 17 de mayo de 2011, exp. 2005-00345-0)". (Se destaca)

Inicialmente debe decirse que la demandada Ángela María Gallego fue convocada al proceso en su calidad de propietaria del vehículo de placa TKE920, lo que no fue objeto de debate en tanto esta confesó como cierto el hecho, sumado a que del historial de vehículo se advierte que adquirió el bien el 9 de septiembre de 2006 y para el 5 de marzo de 2010 que fue expedido el certificado en cita, continuaba siendo la propietaria<sup>62</sup>; con lo que se presume de ella la dirección, mando y control de la cosa inanimada causante del daño que se reclama para la fecha de los hechos. Por lo cual, le competía acreditar con suficiencia que para la fecha del accidente de tránsito se había desprendido del poder intelectual de control y dirección del vehículo de forma total y definitiva.

La demandada alegó que pese a su calidad de propietaria no ejercía la guarda del vehículo pues no tenía poder de decisión sobre la destinación de este, la elección de clientes, la determinación de rutas y guías. No obstante, para la Sala, estos elementos no resultan suficientes para desvirtuar la presunción en su contra, toda vez que como lo ha entendido

---

<sup>62</sup> Ver ruta carpeta 01. ExpedienteRecibido / Archivo 008-2017-00247 CUADERNO 1 PRINCIPAL Pág. 50

la jurisprudencia, esa falta de guardianía sólo se desvanece en eventos en los que existe un vínculo jurídico tal, que represente la entrega total y absoluta de la tenencia de la cosa; no basta entonces que la propietaria no conociera las rutas que se disponían para el vehículo, pues basta que se ejerza sobre el bien un poder intelectual de control y mando, lo que se insiste, no quedó desvirtuado, lo que permite la atribución de responsabilidad que se le hizo. En tal sentido el cargo de la demandada no prospera.

## **6. SÍNTESIS Y CONCLUSIONES.**

Ante la existencia de un litisconsorcio facultativo por pasiva en el que además existe solidaridad, la regla general relativa a que los efectos de la interrupción se surten separadamente para cada litisconsorte, encuentra su excepción en virtud de lo dispuesto en el artículo 2540 del Código Civil. De manera que en los procesos de responsabilidad civil extracontractual como el que ocupa la atención de la Sala, al encontrarse dispuesta la responsabilidad solidaria de la parte pasiva, los efectos de la interrupción de la prescripción que operaron por la notificación del codemandado Transportes Futuro Ltda. se comunican a los codemandados Ángela María Gallego y Nicolás Alberto Lopera, por lo que la excepción de prescripción por ellos propuesta estaba llamada al fracaso, tal como fue resuelto en la providencia que se ataca.

Correspondiendo al demandado demostrar la ruptura del nexo causal entre el hecho dañoso y la consecuencia reclamada, no se acreditó en forma alguna por aquellos que la muerte de Pedro Antonio Giraldo Vásquez hubiese sido ajena al atropellamiento que este sufrió en el accidente de tránsito debatido en el asunto, en tanto no se aportaron elementos probatorios que permitan contradecir las conclusiones del dictamen de medicina legal al respecto, por lo que tampoco este medio exceptivo encuentra prosperidad.

El análisis de causalidad a adecuada que comprende la incidencia a partir del análisis fáctico, jurídico y de regularidad causal, se concluye que en este caso agente y víctima aportaron en la realización del daño, lo que justifica la reducción de la indemnización en los términos del artículo 2357 del Código Civil, razón por la cual se confirmará la decisión en este sentido.

El reconocimiento de perjuicios morales tiene un carácter meramente económico y compensatorio, nunca resarcitorio, y corresponde a quien pretende una reducción de la indemnización, acreditar las razones que llevarían a determinar la menor afectación moral de la parte demandante, lo que no sucedió en el presente caso.

Finalmente, teniendo la carga de probarlo, la propietaria del vehículo no logró acreditar de forma alguna que se hubiere desprendido definitiva y totalmente de la guarda del vehículo, por lo que se halla llamada a responder solidariamente como fue decidido en primera instancia.

En virtud de lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 365 del CGP, la Sala estima que al no prosperar los reparos de ninguna de las partes procede abstenerse de condenar en costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN SALA PRIMERA DE DECISIÓN CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley;

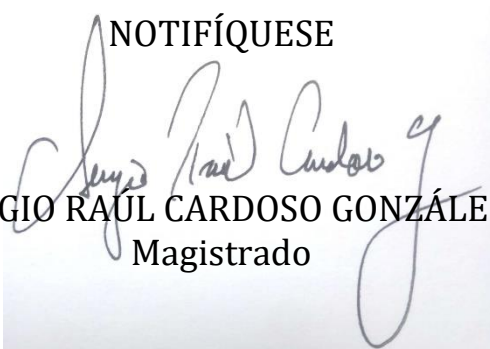
#### 7. FALLA:

**PRIMERO. CONFIRMAR** la sentencia de primera instancia proferida el 12 de marzo de 2021 en todas sus partes.

**SEGUNDO. SIN CONDENA** en costas en esta instancia.

**TERCERO. DEVOLVER** el expediente al juzgado de origen, una vez se encuentre ejecutoriada la presente sentencia.

NOTIFÍQUESE



SERGIO RAÚL CARDOSO GONZÁLEZ  
Magistrado



MARTÍN AGUDELO RAMÍREZ  
Magistrado



JOSÉ OMAR BOHÓRQUEZ VIDUEÑAS  
Magistrado